

Construyendo desde el destierro

Acciones colectivas de población en desplazamiento forzado en Colombia*

Por Flor Edilma Osorio Pérez**

* Artículo recibido en septiembre de 2009.

Artículo aprobado en noviembre de 2009.

** Profesora Asociada de la Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.

Introducción

Más de cuatro millones de colombianos desplazados le dan al país el nada honroso segundo lugar en el mundo en razón de la crisis humanitaria. Ahora desterrados, muchos llegan a los cascos urbanos de sus propios municipios, ya no como campesinos y productores, con sus cosechas el día de mercado, sino aterrados, desposeídos y hambrientos, portadores de una categoría social diferente: son desplazados, parias, los más pobres de los pobres. Con una lógica territorial y cultural, el colonialismo, sinónimo de control de los recursos y de la mano de obra, se manifiesta en Colombia de la mano de la modernidad, en una clara negación de la alteridad. Con todos los estigmas de “sospecha moral” (Agier, 2002, 59) por ser sobrevivientes de la guerra, el temor al contagio de la violencia y la competencia por recursos escasos, los campesinos ahora desplazados y víctimas de los actores armados son responsabilizados, pues “por algo será que los persiguen”. En medio de condiciones liminales extremas en contextos urbanos extraños, su memoria evoca tiempos pasados de abundancia, libertad y buena vida: su vida en el campo, de donde fueron arrojados. Añoran una tierra pródiga en recursos, con pobreza pero sin hambre. Paisajes, comidas, rutinas, climas, libertades, vecindades, músicas, ritmos de vida, son referencias de ese pasado campesino, extrañado e irrepetible. Desde

la pérdida de sus autonomías relativas se produce una importante revaloración de su identidad y de su vida campesina (Osorio, 2007b).

A diferencia de las diásporas de la esperanza, fruto de la migración enmarcada en la búsqueda de un mejor futuro, el desplazamiento forzado se sitúa como diáspora de terror y desespero (Appadurai, 2001). Desde los territorios de la nostalgia, quienes se desplazan deben asumir la reterritorialización de nuevos lugares abriéndose paso a codazos entre los ya residentes, que les recuerdan sus prerrogativas por su antigüedad. Como advenedizos indeseables y persistentes en su derecho a soñar con lugares de esperanza y de prosperidad, quienes viven el desplazamiento avanzan cotidianamente en el tejido de sus propias historias pasadas, presentes y futuras, sus añoranzas y sus perspectivas. Situados en el entrecruce de tiempos y lugares, con muy pocas certezas deben recomenzar sus vidas, no solamente demandando justicia por la vía de políticas de reconocimiento y de redistribución (Fraser, 1997) sino incluyendo paulatinamente exigencias de reparación, aún muy lejanas y esquivas, pero presentes como requerimiento común de su condición de víctimas y sobrevivientes de la guerra. Procedentes de culturas rurales y en la miseria indigna de su cotidianidad, asumen nuevas tareas y prácticas para ser escuchados y para ganar una esquivada legitimidad como actores sociales y víctimas de la guerra. Sus respuestas y propuestas colectivas se corresponden con lo que Zibechi (2007) denomina “ecos del subsuelo”, en la medida en que proceden de actores muy relegados cuyas acciones colectivas, al igual que ocurre con los actores sociales que surgen de la guerra misma, son fácilmente invisibilizadas, deslegitimadas y estigmatizadas. Demandan respuestas efectivas y oportunas del Estado, solidaridad de la sociedad y, sobre todo, dignidad y respeto. Por eso sus acciones emprendidas cobran sentido de beneficio común y de exigencia para que las políticas públicas se implementen como derechos y no como dádivas.

El presente texto, que pretende exponer esa situación, consta de tres apartes. El primero da cuenta de un mapa general de las acciones colectivas emprendidas y de su diversidad. El segundo analiza de manera particular las protestas realizadas por la población en desplazamiento forzado y sus caracte-

rísticas. Finalmente, el ensayo se cierra señalando algunas tendencias y dilemas de estos procesos.

Diversidad organizativa y acciones emprendidas

Las acciones colectivas de desplazados ocurren de manera permanente, aunque no siempre visible y cuantificable. Involucran a organizaciones formales y no formales que surgen con el desplazamiento mismo, a entidades existentes que reorientan sus esfuerzos para dar respuestas al conflicto armado y al desplazamiento forzado, y a muchas otras expresiones colectivas que no se identifican con el desplazamiento, en no pocos casos para protegerse.

Organizaciones formales. Pese a los estigmas y evidentes miserias en que deben recomenzar sus vidas, las personas que sufren el desplazamiento forzado se han ido constituyendo en actores políticos que buscan colectivamente afrontar las incertidumbres, la ausencia de respuestas institucionales y la poca solidaridad de los conciudadanos. Numerosas agrupaciones tienen carácter formal, en consonancia con la exigencia institucional, que solo reconoce como legítimas a tales instancias, especialmente para administrar recursos. Sin embargo, la formalidad no siempre equivale a procesos participativos y activos; además, en ciertos casos tales formalidades se rehúsan para evitar señalamientos, persecuciones y amenazas.

Al igual que las cifras del desplazamiento, las de sus organizaciones son muy diversas. Mientras la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) identifica 548 existentes en la totalidad de los departamentos colombianos, Acción Social señala 155 en 25 de los 32 que componen la nación¹. Ambas fuentes registran el crecimiento significativo de estas agrupaciones, con dinámicas colectivas que se mueven a ritmos muy diversos y que difícilmente se dejan atrapar en las cifras, las cuales, a su vez, poco pueden re-

¹ Las fuentes corresponden a archivos magnéticos facilitados por dichas instituciones.

flejar de los procesos mismos. Su mayor visibilidad se observa en las ciudades y municipios más centrales de cada departamento, tendencia explicable, no solo porque a estos escenarios urbanos arriba la mayor parte de la población desplazada sino también porque allí se concentran en gran parte las instancias gubernamentales y privadas de atención a la población desplazada.

Algunas de estas agrupaciones cumplen un papel clave en la incidencia política necesaria para la reivindicación de derechos, así como en la construcción de opciones de mediano plazo y en la gestión de recursos nacionales e internacionales (Arias, 2004)². Tales procesos están llenos de contradicciones y ambigüedades y no siempre hay correspondencia entre objetivos formales y comunes, pero en todos ellos hay actividades, vínculos y solidaridades significativas, en donde la dimensión instrumental “se convierte en uno de los elementos centrales de cohesión y permanencia en las organizaciones, a manera de incentivo colectivo” (Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas, 2008, 152). Estos espacios de encuentro, organización y acción de la población desplazada construyen sentidos de pertenencia e identidad, no solo a partir de la experiencia de acción colectiva dirigida hacia terceros sino también en sus relaciones vitales cotidianas y en las experiencias de destierro compartidas.

Tienen énfasis y alcances diversos, y sus denominaciones insisten en el desplazamiento, sus lugares de origen y sus raíces étnicas, y en muchos casos resaltan la condición de mujeres jefas de hogar de sus integrantes, como puntos de referencia identitarios colectivos. El papel de las mujeres como sobrevivientes y líderes de procesos colectivos se concreta en múltiples experiencias, que se han ido documentando (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2005). Con frecuencia las agrupaciones tienen como propósito generar procesos de orden económico, tales como actividades agropecuarias, empresariales, artesanales y de vivienda urbana y rural. Además de agrupaciones locales, se

² El autor hace referencia a la Asociación Nacional de Desplazados (Ande), constituida en 1993, la Unión Solidaria por Colombia (Uscol, 1997), la Organización de Familias Desplazadas (Orfades) y la Organización para la Convivencia Pacífica (Adescop), ambas creadas ambas en 1999.

han conformado organizaciones de orden regional y nacional, que no siempre se mantienen en actividad³, buena parte de las cuales reside en Bogotá.

Comunidades en resistencia. Las comunidades en resistencia representan expresiones políticas en constante construcción. Son procesos con una concepción de paz que supera la negociación del conflicto entre los actores armados y reivindica la necesidad colectiva de posicionarse crítica y creativamente frente a los múltiples conflictos que lesionan su integridad como pueblos, sus derechos y sus posibilidades de una vida digna. Múltiples experiencias, con procesos y alcances diversos, han surgido en diferentes lugares del país con el propósito de posicionar de manera colectiva la neutralidad y la autonomía frente a todos los actores armados, y buscan garantizar la seguridad, la permanencia y la continuidad del retorno a sus lugares de origen. Ello ha implicado la creación de normas internas claras que rijan su autonomía frente a cualquier actor armado, legal o ilegal, y que afirmen tanto la capacidad comunitaria para gestionar y dirimir sus conflictos como la formulación de una serie de demandas dirigidas tanto a los actores armados como al Estado (ATI, Planeta Paz, Piupc-UN, 2004).

Para mencionar apenas algunas de estas valiosas experiencias, señalamos el proyecto Nasa de Toribío, en el Cauca, las comunidades afrocolombianas de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia-Cocomacia) y las Asambleas Municipales Constituyentes. Están allí, por supuesto, las denominadas comunidades de paz, que, según Redepaz, alcanzan a ser cincuenta y dos experiencias (Medios para la Paz, 2005), entre las cuales aparecen la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc) y la Comunidad de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño⁴. Procesos como estos representan una

³ A la fecha funcionan la Mesa Nacional de Fortalecimiento, conformada por 20 representantes de diferentes regiones, la Coordinadora Nacional de Desplazados (CND), la Organización de Población Desplazada de los Independientes, La Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Convergencia Nacional de Organizaciones de Desplazados y la Organización de Indígenas Desplazados.

⁴ Diversos estudios se han ocupado de sistematizar tales experiencias. Ver, por ejemplo: Restrepo (2006), Villareal y Ríos (2006), Hernández (2004) y Pulido y Pedraza (2000).

apuesta vital frente a las consecuencias del desplazamiento y la acción de los grupos armados, y al mismo tiempo constituyen una opción comunitaria destinada a consolidar relaciones sociales y procesos de desarrollo no excluyentes ni homogeneizadores. Pese a sufrir bloqueos de sus territorios, desplazamiento, detenciones y amenazas diversas por ser considerados sospechosos de alianzas con los grupos guerrilleros, insisten en fortalecer sus particularidades culturales y políticas y en mantenerse en sus territorios. Indígenas, afrodescendientes, colonos, han conformado la Universidad Campesina o Universidad de la Resistencia, desde la cual buscan transformar su realidad articulando sus saberes entre grupos y entre generaciones, de manera itinerante, en un proceso teórico-práctico permanente que se fundamenta en la seguridad y la soberanía alimentaria y busca la configuración de “territorios de emancipación” en donde lo decisivo “son las relaciones sociales que se construyen sobre la reapropiación de la tierra y los medios de producción”, como lo señala Zibechi (2008, 35). El costo social ha sido alto para todos: estigmatización, asesinatos, negación de su cultura, despojo de territorios ancestrales, desplazamiento forzado, confinamientos y persecución a sus miembros. En su diversidad, ofrecen a la sociedad nacional lecciones de fortaleza, capacidad y creatividad en medio de precariedades materiales que tornan todavía más valiosos sus esfuerzos.

Organizaciones por mandato. Las Mesas de Fortalecimiento de la Población en Situación de Desplazamiento fueron creadas por el Decreto 250 de 2004 a escala nacional y en municipios y departamentos, como una forma organizativa destinada a articular su trabajo y su participación en los planes de desarrollo y en el ejercicio de veedurías de la política pública. En ese momento existían tres organizaciones de orden nacional: la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol), la Coordinación Nacional de Desplazados (CND) y Convergencia Nacional de Población Desplazada. En 2005, en el marco del primer encuentro nacional de líderes de población en situación de desplazamiento, se creó un nuevo ente: la Mesa Nacional de Fortalecimiento de Población en Situación de Desplazamiento, conformada por las Mesas Departamentales de Fortalecimiento. Estos espacios se dinamizan a través

de reuniones periódicas que discuten agendas de trabajo, hacen propuestas y evalúan su trabajo. Ello supone también procesos de formación, encuentros, discusiones y capacitaciones destinadas a consolidar las instancias organizativas (Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto, 2006).

Un estudio reciente analiza el proceso de la Mesa de Medellín y señala una serie de acciones de hecho, como invasiones y tomas de lugares públicos de la ciudad, que fueron respondidas con agresiones de la fuerza pública y amenazas de grupos armados ilegales (Granada, 2008). En ese contexto surge el denominado Movimiento Social de Desplazados (Mosda), que ensaya tanto las acciones pacíficas como las directas.

“El contexto de conflicto armado y violencia (...) exigió de la población variaciones en su accionar que la llevaron a mantener acciones que llamaran la atención de los medios y la sociedad en general, pero que no recurrieran a la violencia, que por un lado los deslegitimaría y por el otro ‘justificaría’ las injustificables acciones de diferentes grupos armados” (ibíd., 275).

La Mesa se constituye en “un momento de maduración de numerosas organizaciones” (ibíd., 277), que surge en el marco de una acción institucional, a través del Acuerdo 49 de 2007 del Concejo Municipal. Reconocida como exitosa, “la Mesa sigue funcionando de manera autónoma a pesar de los obstáculos internos y de los aún mayores obstáculos externos” (ibíd., 278).

Acciones tácitas. Un campo poco aparente es el de los colectivos no formales, cotidianos, de vecindario, que realizan acciones constantes de solidaridad y ayuda mutua e intercambio de recursos. Ollas comunitarias, atención de los hijos y otras expresiones que algunas veces sirven de base para avanzar hacia procesos formales y visibles, forman parte importante de las acciones colectivas que es necesario reconocer como fuente constante de una fuerza sociocultural importante. Pero también están las denominadas resistencias cotidianas, que son expresiones y prácticas casi imperceptibles. Se ubican dentro del concepto de “economía moral” (Thompson, 1995), que se constituye en una especie de

equilibrio o campo de fuerza y en el regateo entre fuerzas sociales desiguales, en el cual el más débil tiene todavía derechos reconocidos sobre los más poderosos. Toda dominación posee sus normas de comportamiento, sus sanciones y sus transgresiones, es decir, un orden aparente y explícito que regula tales relaciones. Y allí se engendran los “textos ocultos” de resistencia cotidiana, que, a manera de compensaciones, se van construyendo a partir de los más débiles y pueden desatar acciones colectivas explícitas de rebeldía cuando se rompe el equilibrio entre explotación y reciprocidad (Scott, 1976). Dado que las resistencias cotidianas se presentan en medio de alianzas tácitas entre las personas y no en expresiones colectivas organizadas y abiertas, pasan inadvertidas.

En un municipio de la costa Caribe los grupos paramilitares definieron quién podría ser el candidato a la alcaldía municipal, una situación, por lo demás, bastante generalizada en nuestro país. Sin embargo, un candidato independiente se inscribió y, al parecer, habida cuenta de su bajo perfil y sus pocas posibilidades de éxito, no fue prohibido, y ocurrió que un sector de la población, de manera no organizada, fue modificando poco a poco su decisión hacia este segundo candidato, quien fue ganando adhesiones “porque era el candidato pobre”, “por demostrar que no nos pueden imponer lo que quieran” y “porque quede claro que aquí no todos somos autodefensas”. Aunque el hombre no ganó, tuvo una votación significativa. Lo interesante de subrayar aquí es la vigencia de un sentido crítico en medio de una situación de dominación, pese a no asumir una acción colectiva explícita, dadas las evidentes condiciones de desventaja⁵. En otro municipio, y frente a la prohibición explícita y personal hecha a los jóvenes, que incluyó amenazas concretas, éstos mantuvieron y ampliaron el uso de aretes, que llegó a ser una práctica generalizada (Madariaga, 2006, 68).

El riesgo disminuye y se previene en la medida en que se asuma una lógica de sometimiento, e incluso de cooperación, con las normas impuestas. De

⁵ Caso documentado por la autora.

ahí que deban obedecerse ciertas órdenes de organización, de participación en manifestaciones, y sobre todo evitar reclamaciones o confrontaciones que puedan provocar problemas con quienes detentan el poder. La historia de reivindicaciones y reclamaciones perseguidas y aniquiladas también crea aprendizajes silenciosos, necesarios para valorar cotidianamente el peligro mientras se mantiene una subordinación aparente. Como lo señala Lüdtke, “un comportamiento conformista no corresponde casi nunca a la imagen de una marioneta” (2000, 71).

Organizaciones que reorientan sus esfuerzos. Varias organizaciones de orden territorial ya existentes, como cabildos, consejos comunitarios de indígenas y afrodescendientes, Juntas de Acción Comunal, sindicatos y organizaciones de campesinos y de colonos, sin modificar su razón social han debido dedicar tiempo y acciones específicas a responder a las demandas de sus asociados desplazados. Sin embargo, sus denominaciones formales no permiten reconocerlas directamente como organizaciones de desplazados. En algunas ocasiones el reordenamiento de prioridades ha llevado a postergar demandas por la tierra y el territorio, para centrarse en las gestiones de la atención de emergencia que surgen con el desplazamiento, con lo cual se prorrogan luchas más estructurales frente a la prioridad de buscar la defensa de la vida.

Participación en otras redes. Nuevos retos frente a exigencias y reivindicaciones tiene la población en desplazamiento forzado. Su condición de víctimas los ha articulado con movimientos de orden nacional más amplios, a fin de conocer, discutir y asumir posiciones frente a las disposiciones gubernamentales. Es el caso de la denominada reparación administrativa, que se asimila a la política social y que constituye un terreno de gran debate. Así mismo está la exigencia de verdad y justicia allí donde el desplazamiento forzado no ha logrado ser suficientemente reconocido, pese a tener el carácter de delito de lesa humanidad. Todas estas luchas se deben mantener en medio de la continuidad de la acción de los grupos armados, que, mediante la práctica de eliminar a los líderes de ambos sexos que demandan sus

derechos, bloquean –con ayuda del miedo– procesos colectivos de orden reivindicativo⁶.

Las acciones colectivas de quienes viven el destierro funden múltiples interacciones, que varían en intensidad y nitidez de acuerdo con la correlación de fuerzas existente, las relaciones de alianza, negociación, subordinación y contestación, que operan con fronteras difusas no excluyentes y mezclan textos públicos y textos ocultos. En tiempo récord y bajo la presión institucional que las impele a constituirse en grupos cohesionados que legitimen su carácter de actores colectivos, las expresiones sociables se aceleran y los acuerdos se aprueban, igualmente forzados por las urgencias de los recursos y las exigencias de los trámites burocráticos. Pero así mismo, en tiempos más lentos y de manera ambigua, quienes viven el desplazamiento forzado van rehaciendo una noción de ciudadanía potencial, que implica su condición de sujetos de derechos –así no los disfrute–, una percepción del Estado como el ‘adversario’ al cual corresponde reclamarlos –así no pueda hacerlo– y una pertenencia a una sociedad nacional mayor –así los rechace.

Acciones de protesta: lugares, sentidos y alcances

Ser y estar desplazado se constituye en la condición y posición desde la cual se originan movilizaciones, reivindicaciones y acciones de hecho para tramitar las demandas ante el Estado y la sociedad. Tales acciones han circulado por la vía institucional, en particular a través de instrumentos legales, como la tutela. La más significativa es la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que recogió 108 expedientes interpuestos por 1.150 núcleos familiares de diferentes lugares del país. La Corte confirmó la existencia de un “estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley” (Corte Constitucional,

⁶ Más de 20 líderes de víctimas han sido asesinados en los últimos tres años.

2004, 88). Dicha tutela dio origen, a su vez, a una Comisión de Verificación que asumió el seguimiento requerido, mediante estudios oportunos sobre la manera como han evolucionado efectivamente las respuestas del Estado⁷. La mencionada sentencia, así como los diversos autos que ha expedido la Corte para poblaciones y grupos específicos en situación de desplazamiento, han favorecido la realización de diversas acciones de hecho encaminadas a exigir tales derechos y la urgencia de darles cumplimiento.

De tales acciones de hecho, de protestas y movilizaciones, nos ocuparemos en este aparte. ¿Por qué tanto interés? Por una parte, es necesaria una mirada analítica que articule este tipo de expresiones reiterativas a los discursos que las acompañan, pues allí hay claves de lectura de estos procesos que surgen de situaciones límites de indignidad y exclusión. Además, es importante dar cuenta de la capacidad de acción y de reacción de este grupo emergente en la realidad sociopolítica colombiana, que se desenvuelve en medio de la guerra misma, en el marco de una reducción significativa de la protesta social a escala nacional, que ha sido deslegitimada bajo el cargo de estar vinculada a la izquierda armada en armas y tratada como problema de orden público.

Entre 1995 y 2004 se identificaron 112 acciones colectivas⁸ contenciosas de personas desplazadas, cuyos repertorios más usuales fueron las tomas institucionales (59), las protestas públicas (16), las invasiones masivas (16), las acciones legales (12), las marchas (6) y los bloqueos de carreteras (6) (Ortega, 2007). Estas expresiones se concentraron en ciertos momentos, lugares y circunstancias de orden político⁹. Algunas —entre ellas la toma de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja establecida en Bogotá, que duró tres

⁷ La Corte ha emitido una serie de autos que se dirigen a proteger derechos fundamentales desde una perspectiva diferencial y que ordenan a Acción Social, ente estatal responsable, el diseño y puesta en marcha de planes específicos de prevención, atención y protección de estas poblaciones.

⁸ Es muy posible que haya un subregistro al respecto, pues los datos de soporte son tomados de textos de prensa, recopilados en la Base de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

⁹ A mediados de 1998, por ejemplo, se registraron cerca de 59 acciones de hecho, el 46% de las cuales fueron “tomas de instituciones” y el 40% ocurrieron en Bogotá. Las acciones se concentraron en el lapso de cambio de gobierno Samper-Pastrana (Osorio Pérez, 2005).

años¹⁰, permiten dar cuenta de diversos repertorios y procesos que se van creando en la marcha, puesto que difícilmente hay historias comunes, sino más que todo puntos de encuentro marcados por la humillación y el estigma. Por eso, con frecuencia, se trata de procesos frágiles que deben superar sus muchas precariedades cotidianas, que se articulan de manera fragmentada a los movimientos sociales y que, además, deben salir adelante en contextos locales de falsa democracia y de continuidad de la guerra.

Veamos una sucinta descripción de algunas de estas experiencias, tomada fundamentalmente de archivos de prensa y que se ha ordenado cronológicamente.

- Marzo de 2009, Bogotá. Ocupación de la Plaza de Bolívar, la iglesia de Francisco y el parque Tercer Milenio (“Viviendo en tablas”, en *El Espectador* 30 de mayo de 2009). Inicialmente un grupo se instala en la Plaza, lugar que concentra material y simbólicamente los poderes públicos y religiosos a escala nacional y capitalina. Paulatinamente van llegando otras familias, que de forma precaria permanecen en el lugar. Ante la indiferencia general de la población, una centena de ellos toma el templo de San Francisco, a un par de cuadras de la plaza. Posteriormente se instalan en el parque Tercer Milenio, también próximo, aunque en dirección al sur. En medio de las tensiones suscitadas entre la Alcaldía y la Nación por la responsabilidad en la oportunidad y calidad de la atención, y de varios intentos de negociación que arrojan resultados parciales, la ocupación continúa. “No se pueden privilegiar las vías de hecho y para concertar con los desplazados, primero deben establecerse en los albergues” (“¿Laberinto sin salida?”, en *El Espectador* 28 de mayo de 2009), es un argumento de los funcionarios que dilata un posible acuerdo.

¹⁰ Del 14 de diciembre de 1999 al 26 de noviembre del 2002.

- 15 de febrero de 2009. Toma de un edificio desocupado del centro de Bogotá, propiedad de la Administración Municipal (Desde Abajo, 2009). “No estamos para quedarnos con este edificio, esto es una forma de presión. Nosotros somos gente pacífica”, manifestó uno de los líderes. La ocupación fue realizada por 114 personas (61 adultos y 53 menores) procedentes de las dos costas marítimas colombianas y que estaban desesperados por las precarias condiciones de vida que soportaban, como lo describe uno de los manifestantes:

“Salimos de nuestra tierra por la violencia. Antes teníamos nuestra finca, con qué vivir, con qué producir la caña, la panela, la carne. Teníamos todo lo necesario para no tener que pedirle nada al gobierno. Queremos mejores condiciones, que se nos trate como seres humanos. Aquí en la ciudad nos desprecian mucho” (ibíd.).

Con el lema “Los derechos no se negocian”, ocupan la edificación de cinco pisos, que es acordonada rápidamente por las autoridades y vigilada por un grupo de quince unidades de la policía (Carreño, 2009). Tres días duró la toma, antes de que se produjeran los acuerdos con la Secretaría Distrital de Gobierno.

- 26 de enero de 2009. Protesta de desplazados en el aeropuerto El Dorado, de la capital (s.a, 2009). Unas cien personas se sitúan en inmediaciones del aeropuerto, en una protesta pacífica, como resultado del incumplimiento de acciones pactadas con el gobierno nacional. Los líderes de la protesta exigen la presencia de Acción Social para que se resuelvan sus problemas, que, según ellos, radican en vivienda, dinero y alimentación.
- 8 de septiembre de 2008. Toma del parque de la calle 93, de Bogotá, una más de una cadena reiterada de ocupaciones del lugar (Codhes, 2008). Cerca de 300 personas desplazadas realizan la acción y son rodeadas por el grupo policial antidisturbios. Algunos niños fueron retirados

del lugar por funcionarios de Bienestar Familiar, para protegerlos en el desalojo. Los manifestantes se negaron a negociar con el Defensor del Pueblo. Las denuncias realizadas giraban en torno al incumplimiento de pactos por parte de Acción Social, adquiridos el 31 de julio del mismo año, a raíz de una ocupación similar hecha en ese mismo lugar (Rodríguez, 2008). La protesta fue considerada ilegal y los líderes fueron amenazados con procesos judiciales. Acción Social manifestó que no negociaría bajo presión, mientras nuevos grupos de desplazados buscaban ingresar al parque. Cuatro desplazados, en sillas de ruedas, acudieron en representación de organizaciones de desplazados discapacitados, que igualmente protestaban por el incumplimiento de los convenios establecidos con el gobierno. Un afortunado y oportuno editorial de *El Espectador* (2008) manifestó:

“Errantes en su propio país, sin que el Estado asuma que toda la dialéctica de la reparación y el posconflicto empieza con ellos. Pero siguen contra los muros de las iglesias o en los semáforos, a las puertas de la Defensoría del Pueblo o de las alcaldías, esperando a que las sentencias de la Corte Constitucional en su favor se cumplan o que las normas legales permitan que el proceso de paz se inicie con soluciones prontas para ellos, que son las víctimas de un conflicto que no parece reconocerlos como tales (“Los desplazados en la 93”, en *El Espectador*, 9 de septiembre de 2008).

- 23 de mayo de 2007. Ocupación del lote El Tiburón, de propiedad del municipio de Barrancabermeja. 25 familias desplazadas de la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba) invadieron el predio con el objetivo de repartir los terrenos inutilizados entre las familias de desplazados que carecían de vivienda, mientras en el puerto petrolero se desarrollaba una jornada de protesta convocada por las centrales obreras. Sin embargo, tanquetas, agentes de la policía, la Sijín y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), venido de Bucaramanga, lanzaron gases lacrimógenos y agredieron a golpes a los manifestantes, que fueron desalojados por la fuer-

za (Agencia Prensa Rural, 2007). Barrancabermeja ha sido uno de los mayores receptores de población desplazada del país, principalmente habitantes de las zonas rurales del Magdalena Medio.

- 12 de julio de 2006. Toma de parque principal de Bosa, localidad del sur de Bogotá (Álvarez, 2006). Durante casi dos meses, de manera creciente, hasta completar alrededor de dos mil personas, y provistos de telas plásticas y palos, convirtieron el parque en un albergue improvisado.

“Luchamos para poder tener una vivienda digna para cada uno de nosotros... Nosotros teníamos nuestra casa en el campo; aquí nosotros bregamos mucho para que nos arrienden una pieza, con seis niños... Por eso pedimos que el gobierno nos solucione lo de la vivienda” (ibíd.).

Con el incremento de adherentes a la movilización, el hacinamiento fue mayor y provocó elevado deterioro de las condiciones de higiene y convivencia. Recibieron algunas muestras de solidaridad de vecinos de la misma localidad, así como de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, expresiones que incluyeron la serenata de un grupo de mariachis y la función de un “circo de paz”. Sin embargo, fueron rechazados por los comerciantes y por algunos habitantes que se sintieron perjudicados en sus intereses, así como por las autoridades locales, que hablaron de infiltración de grupos armados en la toma. Fueron objeto de la intimidación de la fuerza pública y de grupos paramilitares, que los sindicaban de auxiliares de la guerrilla. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba la desesperación colectiva, ya que las negociaciones no avanzaban y algunos abandonaban la toma vencidos por la fatiga. Finalmente se anunciaron ciertos acuerdos, que incluyeron 90 cupos para proyectos productivos, 100 proyectos de la Red de Seguridad Alimentaria y un convenio con 14 mandatarios municipales para el retorno de algunas familias a sus lugares de origen. Luego de un debate alrededor del problema de los desplazados de Bosa suscitado en el concejo de la ciudad, en el cual la administración distrital manifestó su disposición de diálogo y recordó su compromiso de no desalojar por la fuerza, la protesta siguió en medio de ne-

gociaciones que avanzaban con el Distrito pero sin la participación del gobierno nacional (Bermúdez, 2006). El testimonio posterior de uno de los líderes mostró que los motivos de la protesta habían radicado en que “los incumplimientos del gobierno nacional en la entrega de la ayuda humanitaria es algo difícil de entender, y a esto hay que sumarle mala atención de los funcionarios de entidades como Acción Social”. De allí surgió un nuevo colectivo, la Asociación de Desplazados de Santander (Asodesan) (Nación Invisible, 2009).

- 29 de agosto de 2005. “300 familias desplazadas ocupan una urbanización en Patio Bonito” (Agencia Prensa Rural, 2005). Muy temprano en la mañana, cerca de 1.500 personas —incluidos más de cien niños— fueron llegando a la urbanización Riberas de Occidente, situada en el sector bogotano de Patio Bonito, localidad de Kennedy. La urbanización, destinada a vivienda social y suspendida desde hacía cinco años, apenas tenía algunas paredes y pisos. Los manifestantes se declararon en “asentamiento de refugio interno permanente por la dignidad y la paz” y aseguraron que la ocupación era una “forma de protesta y reivindicación”. La intención: presionar a la Administración para que les fueran concedidas condiciones dignas de vivienda en la ciudad y, a mediano plazo, un retorno a sus lugares de origen en condiciones de seguridad. Un hombre de origen pastuso afirmó que “los que estamos aquí somos líderes políticos de cada una de nuestras regiones. Pertenecíamos a la Unión Patriótica, pero los paramilitares nos sacaron corriendo” (“Desplazados ocuparon 160 casas que estaban sin habitar en el suroccidente de Bogotá”, en *El Tiempo*, 30 de agosto de 2005). La policía bloqueó esta acción e impidió el ingreso de alimentos y líquidos (Observatory International Peace, 2005), así como la entrada y salida de personas de la urbanización.
- 7 de noviembre de 2002. Ocupación de la Universidad de Antioquia. “Los primeros en llegar fueron cerca de 500, que bajaron en buses de la parte alta del nororiente de Medellín. Dos horas después apareció otro grupo de 100, a los que la Policía intentó alejar con gases lacrimógenos”

(“Desplazados se toman la U. de A.”, en *El Tiempo*, 7 de noviembre de 2002). Provenientes de cinco asentamientos de desplazados, pedían el cese de hostigamientos y estigmatizaciones a los habitantes de los asentamientos y denunciaban las incursiones de encapuchados, los asesinatos selectivos y las desapariciones. Varias veces desplazados, se quejaban de sus difíciles condiciones y de la fatiga que les causaba la constante solicitud de apoyo al Gobierno.

- 6 de noviembre de 2002. Ocupación de la embajada de Costa Rica en Bogotá por cerca de 70 campesinos desplazados por la violencia, procedentes en su mayor parte del Caquetá. “Tomamos esta medida porque nos han incumplido un acuerdo de hace dos años. Estamos pidiendo vivienda, trabajo, proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria, alimentación”, declaró uno de sus líderes. Arribaron a la sede diplomática en bus y varios de ellos forzaron la puerta de entrada, expresaron que se trataba de una toma pacífica y pidieron asilo político argumentando ser víctimas del conflicto, que los había obligado a abandonar sus tierras (Europa Press, 2002). Dos horas después de iniciada la ocupación y luego de diálogos con el embajador, quien sirvió de intermediario para que la Red de Solidaridad escuchara sus peticiones, abandonaron la zona por entre un acordonamiento policial.
- 12 noviembre de 2001. Toma pacífica de la Defensoría del Pueblo (ACS, 2002). Desplazados procedentes de Barrancabermeja y Urabá y miembros de la Organización Campesina del Valle del Río Cimitarra ocuparon estas oficinas con el fin de propiciar un espacio de diálogo con las entidades estatales, que habían desconocido permanentemente sus derechos y demandas. A raíz de presiones de desalojos y de acuerdos con autoridades nacionales, varios de los dirigentes de la protesta fueron amenazados.
- 16 diciembre de 1997. Protestas y proceso organizativo en Quibdó. Inicialmente ocurre la toma del Coliseo de Quibdó, con la participación

de 32 familias. Se organizan en varias comisiones de trabajo y construyen un “paredón de las blasfemias”, desde el cual se realizan denuncias sobre su situación y condición de desplazados y se crean espacios de encuentro y trabajo con la ONG Paz y Tercer Mundo (Proceso Organizativo de los desplazados, 2003). Desde 1996 llegaron allí desterrados de diferentes lugares. Uno de los protagonistas manifestó:

“Nos vimos obligados a posar donde familiares y amigos (...) Nos reuníamos por sectores, algunos en las oficinas de la comunidades negras, otros en diferentes sectores de ciudad. Muchos ni nos conocíamos. Después de una serie de reuniones nos concentramos en el barrio Escolar por comunidades, donde decidimos tomarnos el Incora e Inurbe; esto fue en el año de 1997” (ibíd.).

En octubre de 1998, y dadas las condiciones de hacinamiento en que se encontraban, los desplazados proceden a ocupar un barrio abandonado de Quibdó, llamado La Cascorva. El 5 de enero del siguiente año asesinan a uno de sus dirigentes, hecho que produjo “un trauma en la organización por el motivo de que a muchos líderes les tocó esconderse por más de tres meses para proteger su vida” (ibíd.). Posteriormente, y con ayudas internacionales, se creó el barrio Villa España para alojar a cien familias, hecho que fue acompañado de la elaboración de 16 proyectos. Al mismo tiempo, y debido al continuo incumplimiento del Estado, 610 cabezas de familia deciden interponer tutelas, de las cuales 450 fallaron a su favor, aunque siguen sin cumplirse.

Considerando que en el país hay cerca de tres marchas diarias de desplazados, por lo menos para el año 2008 (“En el 2008, el país tuvo tres marchas por día”, en *El Tiempo*, 8 de marzo de 2009), es necesario que quienes se han visto desterrados de sus lugares de residencia sean incorporados al conjunto de los grupos sociales del país que protestan y al repertorio de móviles que originan estas acciones. ¿Cómo interpretar estas protestas? Las formas de protesta de los colectivos tienen una significación que todavía no ha sido suficientemente examinada y comprendida. Zibechi llama la atención sobre la necesidad, no

solo de contar y de mostrar frecuencias y grandes manifestaciones como señales de éxito, sino también de mirar las prácticas a través de las cuales manifiestan sus desacuerdos y sus reivindicaciones. Las acciones de hecho, tomas e invasiones de lugares mostradas atrás como ejemplo constituyen mecanismos de presión para exigir una respuesta gubernamental que se ha ido quedando en los escritorios y en las frases muertas de compromisos y planes que no se cumplen. En algunos pocos casos pueden llevar a construir espacios de resistencia y de sobrevivencia, así sea de manera temporal, en los mismos lugares que se ocupan. De manera aleatoria, según los procesos vividos, es posible ir y venir entre protestas y procesos organizativos que van madurando las dinámicas, las confianzas y las búsquedas colectivas. Pese a todo ello, la sociedad sigue ignorando esta problemática. Como manifestaba un diario capitalino,

“Ahora que la sociedad colombiana parece haber tomado conciencia frente a la importancia de acompañar a las víctimas de la violencia, como quedó claro con la multitudinaria marcha contra el secuestro, es preciso que la asimetría frente a las mismas deje de ser el rasero con el que se aborda el neurálgico tema de la responsabilidad colectiva frente a todo tipo de delito criminal (...). ¿Se les dará una solución transitoria y volverán a aparecer en otro lugar de ciudad?” (“Los desplazados en la 93”, en *El Espectador*, 9 de septiembre de 2008).

Tendencias y dilemas

Los ritmos que adquieren las instancias organizativas de la población en desplazamiento forzado no son constantes, lo cual produce la percepción, a veces equívoca, de una existencia efímera de las experiencias colectivas. Sin embargo, cada experiencia deja lecciones y con frecuencia, como el ave fénix, ellas renacen, van y vienen, construyendo posibilidades de acción y de vida. En condiciones extremas, son a la vez una fuerza mayor, pero así mismo constituyen un esfuerzo que no solo carece de una base de apoyo material para su continuidad sino que se ve afectado por el contexto de polarización y de amenaza que confiere una incertidumbre permanente en su presente inme-

diato y, por supuesto, en su futuro próximo. Sus biografías políticas y sociales y las experiencias de sociabilidad, de liderazgo, cercanía o distanciamiento de los espacios comunitarios y organizativos previos al desplazamiento, así como los impactos del desplazamiento en dichas prácticas, van a originar procesos que pueden ser similares a los experimentados, pero que permiten igualmente innovar prácticas y discursos, a fin de que ellos sean acordes con otras situaciones. La fuerza de los puntos de referencia identitarios, sean ellos étnicos, territoriales o de intereses y necesidades, preexistentes al desplazamiento o surgidos con él, entran a desempeñar un papel importante en la configuración de las acciones colectivas.

Las características y los traumas del conflicto armado interno que esas poblaciones han vivido, el lugar de llegada y su cercanía o lejanía con el lugar de salida, las expectativas de retorno, son factores que entran a jugar en las búsquedas y los sentidos de pertenencia con los espacios organizativos existentes o que pueden presentarse. Así es posible entrelazar diferentes lógicas y sentidos de la acción colectiva. Desde los que tienen en mente el retorno hasta aquellos que contemplan la imposibilidad de volver a sus lugares de origen, tales proyectos centran sus esfuerzos en la creación de alternativas de diversos niveles, pero siempre encaminadas a reconstruir sus vidas. De esa forma, las acciones van desde la reivindicación y reconocimiento de sus derechos como población desplazada hasta la consolidación de opciones duraderas y sostenibles. Algunas de las tendencias, que son a la vez tensiones significativas en el seno de las comunidades y en su relación con otros actores, son mencionadas a continuación.

Sobrevivir y participar, un dúo difícil. Protestar en medio de la guerra y de las presiones de diversos grupos armados legales e ilegales es un reto y un riesgo. Inclusive lo es simplemente mantener la ocupación de espacios públicos —con permiso de las autoridades—. Es el caso de quienes han sido ubicados en coliseos o escuelas y que al poco tiempo reciben amenazas destinadas a forzarlos a regresar “de forma inmediata a sus parcelas”, aduciendo que perturban el orden y la tranquilidad del municipio y señalando a sus líderes como

“agitadores al servicio de la guerrilla” (Equipo Nizkor, 2000). Tales presiones son similares a las expresadas por funcionarios locales e inclusive por otros pobladores que compiten por los recursos¹¹. En Medellín, por ejemplo, luego de la toma pacífica de la Universidad de Antioquia hecha en 2002, se denunciaron asesinatos, desaparición forzada y amenazas por parte de paramilitares y abuso de la fuerza pública con la población desplazada (Granada, 2008). En el marco de los procesos de reivindicación de los grupos de víctimas que exigen verdad, justicia y reparación, 22 líderes han sido asesinados en los últimos tres años y muchos otros amenazados y exiliados, pese a los reportes de alertas sobre los riesgos y la solicitud de protección hecha por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos¹². Una situación que debe incluirse tiene que ver con las difíciles condiciones económicas de subsistencia familiar, que generalmente actúan como desmovilizadores silenciosos de quienes participan en tales procesos, dada la dificultad para asumir los costos de transporte y el tiempo que demandan las reuniones de coordinación y trabajo de los desplazados.

El Estado: entre antagonista y proveedor. Relaciones tensas y cambiantes. La relación con el Estado por conducto de los funcionarios está marcada por muchas contradicciones. Mientras para los desplazados, en los funcionarios reposa la decisión de una ayuda, de la inclusión o la exclusión, para los funcionarios, con frecuencia, los desplazados son demandadores de servicios que fatigan y que no son fáciles de atender. Este campo de relaciones amerita un mayor conocimiento, reflexión y atención. La dificultad para establecer relaciones de confianza mutua, las contradicciones que encierra un vínculo que supera a las personas mismas, tienen que ver con las percepciones de los funcionarios sobre la población desplazada (Jaramillo, 2004), al tiempo que con las experiencias y percepciones de quienes están viviendo el desplazamiento hacia lo que es el Estado. A ello hay que agregar la ausencia de planes de atención

¹¹ Hace 9 años campesinos invadieron el lote Usaquéen, de Montería, destinado a 35 familias desplazadas, sin que se haya resuelto la situación (Sofán Coronado, 2009).

¹² Ver, por ejemplo, el Auto 009 de 2009.

integral, local y regional, en donde, vistos como problema social, evidencian un conflicto que se quiere situar por fuera de sus municipios: los gobernantes no saben ni quieren hacer nada concreto al respecto. La fragilidad y falta de voluntad política estatal en los niveles nacional, regional y local han llevado a que la Corte Constitucional emita el auto No. 052 de 2008, en el cual se exige a gobernaciones y alcaldías del país responder a una serie de preguntas orientadas a precisar la estrategia de coordinación de las acciones territoriales destinadas a atender a la población desplazada, con miras a asegurar la coherencia entre obligaciones y recursos de los entes territoriales.

Una mirada a los Comités Municipales de Atención a los Desplazados revela que estos espacios no se distancian de las lógicas políticas locales tradicionales y que por tanto tienden a activarse según ciertas funciones, lo cual refuerza el punto de referencia institucional como espacio excluyente, clientelista y corrupto, en donde los desplazados entran a formar parte de la “maquinaria” institucional, para reencauchar viejas prácticas en nuevos escenarios. No hay continuidad en la participación, puesto que la población desplazada está presente apenas en el primer momento del desplazamiento para dar vía a sus demandas específicas e inmediatas, cosa que refuerza el énfasis puesto en la atención de emergencia (López, 2007). Decisiones administrativas improvisadas e inadecuadas, oídos sordos de los funcionarios locales, incluidos los personeros, y una negación insistente del conflicto armado interno y del desplazamiento en sus jurisdicciones, aparecen como constantes en las instancias locales y departamentales¹³, en medio de la impotencia de las comunidades desplazadas para ejercer de manera real y oportuna la veeduría sobre las entidades. La perversa confusión establecida entre el sistema de atención y la reparación administrativa –al equiparar con formas o mecanismos de reparación a las víctimas las respuestas institucionales de carácter obligatorio que debe dar el Estado a la población desplazada– tergiversa el sentido profundo de esta atención y diluye el derecho de los desplazados a ser beneficiarios de políticas sociales oportunas y eficaces (Bello y Osorio, 2008).

¹³ Observación de la autora en diversos espacios institucionales de orden regional.

Los procesos colectivos de los desplazados se articulan funcionalmente a las redes de cooperación internacional e intercambian recursos materiales y simbólicos. La guerra que hay en Colombia se enmarca en un proceso de tipo *glocal* –que globaliza lo local y localiza lo global– (De Souza Santos, 1999). Encontramos allí una intervención cada vez más explícita, contundente y multifuncional de los Estados Unidos, y también de la Unión Europea e inclusive del Japón, y una presencia cada vez más fuerte de ONG internacionales de ayuda humanitaria y de desarrollo que incluyen a Colombia dentro de sus programas, en muchos casos a solicitud de las mismas ONG nacionales, que a su vez buscan la solidaridad, la presión política y la veeduría internacionales para proteger expresiones sociales amenazadas constantemente por el conflicto armado. La convergencia temporal del incremento del desplazamiento forzado en Colombia con la construcción de la categoría transnacional de desplazado ha facilitado una articulación simultánea entre procesos nacionales y expresiones internacionales. Con la presencia de las ONG internacionales se establece una serie de relaciones entre las instancias nacionales, regionales y locales, así como con los procesos particulares de organizaciones de desplazados. Lugares, tipos de población, análisis de la situación y metas priorizadas visibilizan y a la vez ignoran, lo cual da lugar a un condicionamiento importante de las orientaciones y prácticas de atención a las poblaciones en desplazamiento forzado. En ese proceso –del cual hay sin duda evaluaciones internas constantes pero poca discusión crítica pública, abierta y comparada– se ha ido configurando una intrincada red de la cual, sin desconocer los montos de los fondos invertidos y los logros concretos alcanzados, es muy poco probable que se desprendan acciones coordinadas que potencien procesos sostenibles, de mayor incidencia social y durabilidad en el tiempo (Osorio, Rodríguez, Madera, Solano, 2005). Prácticamente todos los recursos de la cooperación internacional ingresan actualmente a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, lo cual tiene serias implicaciones adversas, tanto en el fortalecimiento de los intereses y orientaciones gubernamentales como en la exclusión del apoyo a procesos autónomos y críticos del sistema de gobierno imperante.

La cooperación internacional, con su amplia heterogeneidad, se ha posicionado como un actor más en el contexto del conflicto armado y entra a terciar de diferente manera en el nivel nacional, pero sobre todo del regional y local. Además de recursos económicos, compromete recursos humanos y simbólicos de solidaridad internacional que obran como legitimadores y respaldos en estos procesos sociales que se tejen en mucha soledad y peligro. En su intervención hay un potencial riesgo de reforzar y reproducir relaciones inequitativas de poder entre donantes y receptores de las ayudas. Las acciones colectivas de los desplazados han entrado así a formar parte de un dispositivo humanitario internacional en el cual se intercambia legitimidad y recursos en diferentes vías y en donde estas experiencias se constituyen en concreción de logros de una cadena institucional muy vasta.



Nuevos actores suponen nuevos territorios que se incorporan a la disputa y a la vida nacional por la vía del dolor y la guerra. La amenaza y la pérdida dan lugar a procesos de territorialización de profundos significados en sus relaciones socio-espaciales, desde los cuales surgen y se reafirman puntos de referencia identitarios surgidos de la propia guerra. Por eso muchos tienen una fuerte connotación negativa que los asimila a sectores sospechosos, delincuentes, mentirosos, holgazanes, transmisores de problemas, etc. Parte importante de su labor ha sido reconvertir tales identidades negativas. Es decir, esforzarse por lograr una legitimidad social que se les muestra esquiva porque el establecimiento y la misma sociedad insisten en responsabilizarlos y en situarlos como aliados y cómplices de los actores armados. Con frecuencia son revictimizados por sus conciudadanos y por los funcionarios que los deben proteger y apoyar. En medio de esas nuevas referencias identitarias impuestas y tejidas con el afán y el cansancio cotidianos, también se consolidan referencias colectivas con historias y memorias de larga data, en donde el territorio común –habitado o despojado– se constituye en potencia aglutinadora de esfuerzos comunes. Aprendizajes e idealizaciones de luchas pasadas entran a jugar en las

decisiones y en los repertorios de sus nuevas movilizaciones. Las características, tendencias y tensiones encontradas constituyen una réplica de dinámicas y expresiones de la sociedad colombiana. Es un espejo más de los rezagos poco evidentes de la guerra, que amplían brechas, estigmas y exclusiones.

Bibliografía

ACS, 2002, “Acción urgente ante amenazas en Colombia contra dirigentes de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol)”, 7-13 enero, disponible en <http://www.sindominio.net>, fecha de consulta: 12 de septiembre de 2008.

Agencia Prensa Rural, 2005, “300 familias desplazadas ocupan una urbanización en Patio Bonito” en *Prensa Rural*, 29 de agosto, disponible en <http://www.prensarural.org>, fecha de consulta: 20 de septiembre de 2008.

-----, 2007, “Fuerza pública desaloja desplazados en Barrancabermeja con saldo de tres heridos, un detenido y un desaparecido”, en *Prensa Rural*, 24 de mayo, disponible en <http://www.prensarural.org>, fecha de consulta: 15 de septiembre de 2008.

Agier, M., 2002, *Aux bords du monde, les refugiés*, París, Editorial Flammarion.

Álvarez, G., 2006, “Desplazados en Bosa: entre el abandono y las agresiones de la fuerza pública”, en *Prensa rural*, 25 de agosto, disponible en <http://www.prensarural.org>, fecha de consulta: 22 de septiembre de 2008.

Appadurai, A., 2001, *Après le colonialisme*, París, Payot.

Arias, L. A., 2004, “Procesos organizativos y construcción de identidades entre personas en situación de desplazamiento”, en Arias, L. A., coordinador, *Or-*

ganización y participación social en Colombia. Bogotá: Fundación Universitaria Monserrate.

ATI, Planeta Paz, Piupc-U.N., 2004, *Memorias de encuentro internacional. La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización*. Bogotá, Difundir Ltda.

Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006, “Mesa Departamental de Población en Situación de Desplazamiento” 15 enero, disponible en <http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co>, fecha de consulta: 22 de febrero de 2008.

Bello, M. y Osorio, F. E., 2008, “Acciones colectivas de la población desplazada”, en Jiménez, S., *Desplazados víctimas en permanente transición*, Bogotá, Ediciones Antropos Ltda, disponible en http://justiciayreparacion.org/Galeria_Contentidos/libro_general.php

Bermúdez, O., 2006, “La protesta de Bosa paso a paso” en *Viva la Ciudadanía*, agosto, disponible en <http://www.viva.org.co>, fecha de consulta: 28 de noviembre de 2008.

Carreño, J., 2009, “Más de 70 desplazados se tomaron un edificio en Bogotá” en *Caracol Radio*, 16 de febrero, disponible en <http://www.caracol.com.co>, fecha de consulta: 20 de febrero de 2009.

Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 2008, “Desplazados fueron desalojados del parque de la 93”, 8 de septiembre, disponible en <http://www.codhes.org>, fecha de consulta: 25 de enero de 2009.

Coronado Sofán, C., 2009, “Alcaldía debe desalojar invasores de Usaquéen”, en *El Universal*, 2 de marzo, disponible en <http://www.eluniversal.com.co>, fecha de consulta: 28 de marzo de 2009.

Corte Constitucional, 2004, *Sentencia T-025. Desplazamiento forzado*, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos.

De Souza Santos, B., 1999, *La globalización del derecho*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Ilsa.

Desde Abajo, 2009, “Los derechos no se negocian: desplazados toman edificio”, en *Desde Abajo*, 18 de febrero, disponible en <http://www.desdeabajo.com>, fecha de consulta: 20 de febrero de 2009.

Equipo Nizkor, 2000, “Paramilitares amenazan a desplazados albergados en el municipio de Tuluá”, en *Tlahui*, 7 de septiembre, disponible en <http://www.tlahui.com>, fecha de consulta: 24 de agosto de 2008.

Europa Press, 2002, “Unos 70 desplazados ocupan la embajada de Costa Rica en Bogotá”, en *La Voz de Galicia*, 6 de noviembre, disponible en <http://www.lavozdeg Galicia>, fecha de consulta: 23 de septiembre de 2008.

Fraser, N., 1997, “La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación” en Heller, A. y Frasersy, N., editores, *Justicia Social*, Bogotá, Universidad de los Andes/Facultad de Derecho/Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus).

Granada, J. G., 2008, “Desplazamiento forzado y acción colectiva. La mesa de organizaciones de población desplazada en Medellín”, Medellín, Instituto de Estudios Políticos/Universidad de Antioquia/Tesis de grado para optar al título de Master en Ciencia Política.

Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas, 2008, *Acciones colectivas y constitución de sujetos sociales y políticos*, Cali, Universidad del Valle.

Hernández, E., 2004, *Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.

Jaramillo, A. M., 2004, *Miedo y desplazamiento. Experiencias y percepciones*. Medellín, Corporación Región.

López Becerra, M. H., 2007, “La política pública en desplazamiento forzado en Caldas, Riosucio y Samaná. Interpretaciones, enfoques y participación”, manuscrito no publicado, Manizales, Universidad de Caldas

Lüdtke, A., 2000, *Des ouvriers dans l'Allemagne du XX siècle. Le quotidien des dictatures*, Paris, L'Harmattan.

Madariaga, P., 2006, *Matan y matan y uno sigue ahí. Control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo en Urabá*, Bogotá, Uniandes.

Medios para la paz, 2005, “Debates sobre las comunidades de paz en Colombia”, disponible en www.mediosparalapaz.org/?idcategoria=1973#6, fecha de consulta: 12 de agosto de 2007.

Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2005, *La tradición, la semilla y la construcción*, Bogotá, Unifem.

Nación Invisible, 2009, “Lo que quedó de la toma de desplazados por la violencia armada al parque de Bosa” en *Mi semana*, 22 de febrero, disponible en <http://comunidades.semana.com>, fecha de consulta: 7 de marzo de 2009.

Observatory International Peace, 2005, “Bloqueo alimentario y sanitario a los desplazados de Patio Bonito por parte del Esmad”, en *Centro de Medios Independientes, Indymedia*, 31 de agosto, disponible en <http://colombia.indymedia.org>, fecha de consulta: 5 de septiembre de 2005.

Ortega, H., 2007, “Acción colectiva y desplazamiento interno forzado, 1995-2004”, en Ortiz, D. L., *Restablecimiento, reparación y procesos organizativos de la población en situación de desplazamiento*, Manizales, Centro Editorial Universidad de Caldas.

Osorio Pérez, F. E., 2005, *Los desplazados. Entre survie et résistance, identités et territoires en suspense*, Francia, Antr Lille.

-----, 2007a, “Tierra, territorio y poder local en tiempos de guerra” Ponencia presentada en la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

-----, 2007b, *Allá se sufre mucho... pero se vive mejor*. Ponencia presentada en el XII Congreso de Antropología de Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Osorio Pérez, F. E., Rodríguez, A. M., Madera, J., Solano, Y. (2005). *Cooperación internacional y desplazamiento forzado*. Sincelejo: AVImpresos.

Proceso Organizativo de los desplazados, 2003, *Reseña histórica del proceso de los desplazados de 1996 en la ciudad de Quibdó*, disponible en <http://www.choco.org>, fecha de consulta: 25 de febrero de 2008.

Pulido, L. M.; Rodríguez, A. L. y Pedraza, B., 2000 *Entre el fuego. Tres experiencias de participación en Zonas de conflicto armado*. Fundación para la Participación Comunitaria, Bogotá, Acción Ecuémica Sueca.

s.a, 2009, “Protesta de desplazados en el aeropuerto El Dorado”, *Caracol Radio*, 26 de enero, disponible en <http://www.caracol.com.co>, fecha de consulta: 20 de febrero de 2009.

Restrepo G. I., 2006, “Dinámicas e interacciones en los procesos de resistencia civil. Estudio de caso comparado entre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare” en *Revista Colombiana de Sociología*, número 27, Universidad Nacional, Bogotá.

Rodríguez, A., 2008, “Desplazados duermen en el Parque de la 93 hasta que les ayuden”, en *El Espectador*, 31 de julio, disponible en <http://www.elspectador.com>, fecha de consulta: 26 de septiembre de 2008.

Scott, J., 1976, *The moral economy of the peasants*, New Haven, Yale University Press.

Thompson, E., 1995, *Costumbres en común*, Barcelona, Editorial Crítica.

Villareal, N. y Ríos, M. A., 2006, *Cartografía de la esperanza. Iniciativas de resistencia pacífica desde las mujeres*, Colombia, Corporación Ecomujer.

Zibechi, R., 2007, *Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento*, Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Programa Democracia y Transformación Radical.

-----, 2008, “Cuando el sótano dijo ¡basta!”, en *Le Monde Diplomatique*, mayo.